



PERSPECTIVAS

SUPLEMENTO DE ANÁLISIS
POLÍTICO, NO. 31

ABRIL 2009

Los riesgos y retos de la seguridad ciudadana en Nicaragua

La seguridad ciudadana ha sido un tema ausente en la agenda nacional, salvo alguna coyuntura específica que eleva de nuevo la alarma sobre la vulnerabilidad de los ciudadanos ante la violencia en las calles y en los hogares. No obstante, los problemas de inseguridad han seguido constantes en el país, manifestándose cotidianamente en violencia, hechos criminales y en el creciente sentimiento de temor en la población. Los análisis sobre este tipo de situaciones son escasos, prácticamente comprenden las estadísticas periódicas de la policía y las notas rojas en los medios de comunicación. En esta oportunidad, queremos plantear el problema desde los riesgos a la seguridad, los retos para mejorarla y los actores públicos y privados que deben estar involucrados en este reto.

Los antecedentes de la inseguridad y la violencia

Los problemas de inseguridad y violencia en el país no son nuevos. De hecho, han sido una constante desde 1990 a la fecha. Durante todo ese período podemos distinguir la presencia de dos tipos de violencia: la Violencia Política, asociada a la demanda de derechos y a las luchas de poder de los grupos sociales y políticos, y la Violencia Social, que comprende la violencia delictiva relacionadas a la descomposición social y a la violencia doméstica. Estos tipos de violencia se han transformado a lo largo del proceso de transición,



por lo que se pueden distinguir tres grandes etapas: desde la transición hasta 1997, el período entre 1998 y el 2006, y los últimos dos años.

La primera fase entre el 90 y el 97 se caracterizó por la violencia política generalizada y una tendencia ya creciente de violencia social. En ese período, los hechos de violencia política estuvieron asociados a conflictos inherentes a la transición como: la pacificación y reinserción de ex combatientes, los conflictos por la propiedad, la herencia sandinista y la reforma económica. La violencia social se caracterizó por una tendencia creciente sobre todo en los dos principales tipos de delitos: contra las personas y contra la propiedad.

La segunda fase, entre el 98 y el 2003, estuvo signada por el decrecimiento de la violencia política hasta reducirse a acontecimientos muy particulares como las protestas de los estudiantes universitarios por la aprobación del 6 %, los conflictos de propiedad y algunos hechos de violencia electoral. La tendencia de violencia social mantuvo su curva de crecimiento con una pequeña baja en el año 99.



La reaparición de la violencia política

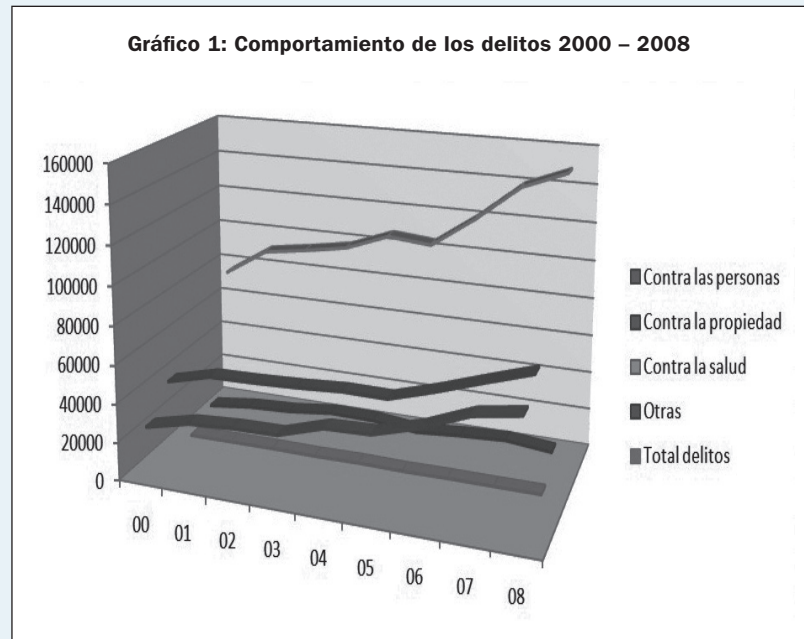
La tercera etapa de violencia durante los últimos dos años, se ha caracterizado por la reaparición de la violencia política en toda su crudeza. Pero además, por cambios importantes que se están produciendo en las expresiones de violencia social.

La ola reciente de violencia política ha girado en torno a la defensa de parte de los grupos gubernamentales de aquellos espacios públicos más simbólicos para la manifestación de disenso en el país. Con el uso de la oposición de las Rotondas y de las calles para hacer sus manifestaciones políticas, estos espacios se han tornado “Objetos Simbólicos” que las esferas gubernamentales pretenden copar mediante el uso de la violencia para evitar cualquier manifestación de oposición pública. Esta situación se agravó producto de la violencia electoral y el incremento de conflictos de propiedad. Los más violentos acontecimientos se desarrollaron en el contexto de la pasada campaña para las elecciones municipales y los primeros meses de este año, cuando diferentes manifestaciones de oposición cívica fueron atacadas por grupos de simpatizantes gubernamentales y los CPC en varias ciudades del país, especialmente Managua y León.

A diferencia de los conflictos de la transición, esta nueva violencia política tiene características que despiertan nuevas y a la vez viejas preocupaciones: el uso de la maquinaria estatal para reprimir manifestaciones públicas y el uso de grupos casi paraestatales para llevar a cabo sus propósitos.

Las nuevas características de la violencia social

La tendencia de crecimiento de los delitos o violencia social, no es reciente en el país, pero las esta-



dísticas muestran que últimamente se están produciendo cambios importantes que llaman la atención y deben ser atendidos por el estado lo más pronto posible. La primera característica es que desde el año 2006 hasta el 2008 la curva de crecimiento del total de delitos se ha incrementado mucho más que en años anteriores.

Más peligroso aún, es que a partir del año 2005 la brecha entre el número de delitos contra las personas y los delitos contra la propiedad se ha venido acortando. Esto quiere decir que año con año se reportan más delitos contra las personas.

Durante los últimos cinco años hemos pasado de una variación de los delitos de 9.0 a 11.0 en el último

año, pero mientras la variación de los delitos se incrementa, la efectividad policial disminuye y en el mismo período ha descendido desde 75.4 % a 33 %.

Los delitos más frecuentes son siempre las lesiones, los hurtos y ciertos tipos de robos, pero los hechos de violencia que causan más muertes son los accidentes de tránsito, los homicidios y asesinatos y los suicidios, que no son precisamente delitos pero causan preocupación por el número de muertes que provocan y son el indicador por excelencia de las “sociedades enfermas”. En Nicaragua, los suicidios se han incrementado durante los últimos años y sus víctimas son mayoritariamente hombres entre los 18 y 25 años. Al respecto, un

TABLA 1: HOMICIDIOS Y ROBOS POR CADA 100 MIL HABITANTES

	2004	2005	2006	2007	2008
Homicidios	12	13	14	13	13
Robos	397	390	473	491	591



dato que llama la atención es que la mayoría de las personas que cometen suicidio lo hacen en estado de sobriedad, lo que denota una decisión clara y consciente de la acción. (Ver tabla #1)

Según los datos de la policía, la tasa de homicidios se ha mantenido oscilando en 13 por cada 100 mil habitantes, una de las más bajas respecto a los demás países de Centroamérica; sin embargo, uno de los grupos de delitos que ha crecido últimamente son los delitos sexuales. Mientras tanto, los robos por cada 100 mil habitantes han pasado de 397 en el 2004 a 591 en el año 2008. De acuerdo con el informe de gestión presentado por la Directora de la Policía, Aminta Granera, este tipo de delitos representan una preocupación para la institución, particularmente los robos con intimidación o asaltos.

Violencia dirigida contra las mujeres

Otro aspecto sensible es que esta violencia convierte a las mujeres en sus principales víctimas. De hecho, las estadísticas policiales indican que un poco menos de la mitad de las víctimas son mujeres,

poco más de un tercio son amas de casa, adultas. En delitos como las lesiones, son la mitad de las víctimas y en los casos de violación que tienen mujeres como víctimas, la mitad o un poco más de ellas son niñas, menores de 14 años. Por su lado, los que cometen delitos son hombres en el 95 % de los casos.

Una percepción no generalizada

Las encuestas de opinión pública que le siguen el pulso a las percepciones de la población respecto a la seguridad, muestran que este tema no es la principal preocupación de la ciudadanía, que coloca al desempleo y la pobreza entre los principales problemas del país. La inseguridad aparece en el tercero, cuarto y hasta quinto lugar de importancia dependiendo de la coyuntura, y con porcentajes de un solo dígito. Sin embargo, la seguridad si aparece como un porcentaje significativo entre los principales problemas del barrio o comarca.

En términos de confianza política, la ciudadanía siempre le ha otorgado un porcentaje mayoritario a la institución policial, sin embargo la confianza en su desem-

peño es parcial, entre el 60 y 70 % valoran sus actuaciones como “regularmente profesional”. Un caso diferente es la valoración que los ciudadanos hacen de los tribunales de administración de justicia, quienes son evaluados con bajos porcentajes de confianza. Al menos eso muestran los resultados de las encuestas realizadas durante el último año. (Ver gráfico #2)

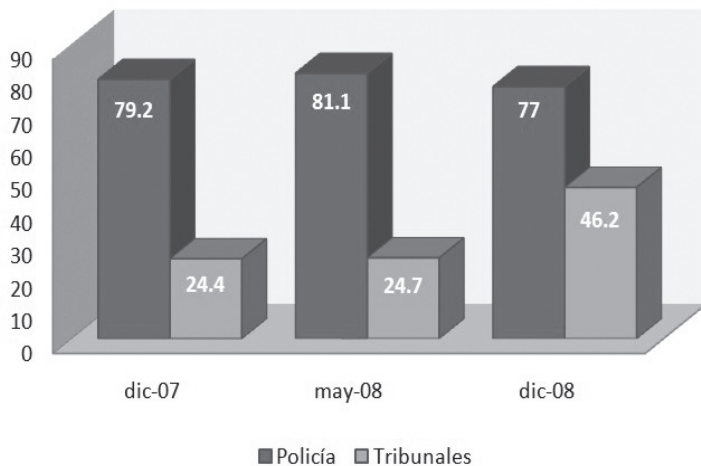
La población reconoce la actuación policial, en ese sentido, la aprobación a la gestión de la actual directora siempre ha mantenido altos porcentajes, así como la valoración que hacen de los operativos policiales contra el narcotráfico internacional.

Otros datos interesantes

Las series estadísticas muestran algunos datos interesantes que vale la pena mencionar en esta oportunidad. Uno de ellos es que a lo largo de los últimos 18 años, los momentos pico de la violencia política y social siempre coinciden con los períodos de cambio de gobierno. Este fenómeno pareciera estar asociado con la percepción de incertidumbre que se genera en la gente frente a los cambios que se espera realice la nueva administración de gobierno. Sin embargo, es necesario hacer notar que esa tendencia de crecimiento no ha disminuido en los dos últimos años.

Otro dato importante es que el índice de victimización recogido en las estadísticas policiales pareciera coincidir con los datos de las encuestas de opinión. Es decir, que si para la policía el riesgo de ser víctima de delito es de 1 x 36 personas en el último año, las encuestas de opinión del 2008 indican que el 30 % de los encuestados declararon haber sido víctimas de delito, ellos o algún familiar durante los últimos 18 meses. Ese porcentaje pasó de 14.5 en marzo 2007 a 29.7 en mayo del 2008.

Gráfico 2: Confianza parcial en policía y confianza en tribunales



Fuente: Encuestas SISMO. M&R. 2007 y 2008.



Los factores de la inseguridad

Algunos factores pesan más que otros en los hechos y las percepciones de inseguridad de la gente. En Nicaragua, parece ser que estas percepciones están asociadas con los factores de su entorno más cercano, tales como los expendios de licor, expendios de droga, grupos juveniles y pandillas. Estos son los factores situacionales. Sin embargo, esos no son los únicos factores, existen otros de carácter estructural que pesan duramente sobre esta realidad. (Ver tabla #2)

Muchas de las acciones de la policía se han encaminado a prevenir el delito interviniendo sobre los factores situacionales. Pero, si se quiere hacer un verdadero cambio en las condiciones de la seguridad, la violencia y la criminalidad en Nicaragua, en realidad se deben atacar los factores estructurales.

Los riesgos y los retos

Eso plantea una serie de retos que es indispensable asumir si no se quiere correr el riesgo de que la preciada frase: "Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica", se convierta en una reminiscencia del pasado. La premisa de partida es, y ha sido siempre, la voluntad política de las instituciones estatales, el ejecutivo en particular, de ponerse al frente de la situación.

En ese sentido, uno de los primeros y más grandes retos pasa por cambiar la visión tradicional y autoritaria que las instituciones estatales tienen de la seguridad y sus problemas, y que no se cargue de responsabilidad únicamente a la policía. El segundo paso consiste en la formulación de una verdadera política de seguridad que integre la acción de las diferentes instituciones del estado: policía, fiscalía, tribunales, sistema penitenciario, etc., pero a partir de un proceso amplio de debate y consulta con

TABLA 2: FACTORES ESTRUCTURALES Y SITUACIONALES DE LA INSEGURIDAD	
Factores estructurales	Factores situacionales
Debilidad de las instituciones estatales.	Expendios de droga y licor en asentamientos urbanos.
Falta de políticas sociales preventivas.	La proliferación y uso de armas de fuego, particularmente las ilegales y las de fabricación casera que ahora son de uso común en los hechos de violencia política.
Limitado y desigual acceso de los ciudadanos a la justicia.	Grupos de jóvenes en riesgo y pandillas.
Marginalidad y desigualdad de grandes grupos de población, especialmente mujeres, jóvenes y ex combatientes que nunca tuvieron oportunidades de reinserción.	Existencia de grupos armados en zonas rurales.
Poca o nula presencia estatal en territorios rurales alejados.	El incremento de vehículos, las vías inadecuadas, la mala señalización y la falta de observación de las regulaciones de tránsito.
La persistencia de los conflictos de propiedad.	
Matriz cultural patriarcal y autoritaria.	El hacinamiento habitacional y la falta de servicios básicos en centros urbanos, particularmente en los asentamientos espontáneos.
Influencia de factores externos como la crisis económica internacional, el narcotráfico y otras formas de crimen organizado, las migraciones, los medios de comunicación.	

toda la sociedad y no solamente con los CPC.

Pero no solamente eso, sino también la formulación de políticas sociales que sirvan de colchón de prevención a los problemas de seguridad, violencia y delincuencia. Tal es el caso de las políticas que se orienten a reducir la inequidad y desigualdad, creando verdaderas oportunidades de inserción social para los grupos que más la sufren: mujeres, jóvenes y minorías como las etnias.

Estos retos no son nuevos ni son los únicos, pero si urgentes sobre todo ahora que los derechos humanos y ciudadanos son más vulnerables, cuando la credibilidad de la policía y demás instituciones encargadas de la seguridad se encuentra comprometida por los discursos y acciones del gobierno y cuando el crimen organizado no ha logrado permear de manera significativa a las instituciones de administración de justicia.